Recomendación General Número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer, sobre la violencia por razón de género contra la mujer

Mónica M. Cruz Espinosa*

En julio de 2017 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano creado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como CEDAW por sus siglas en inglés),¹ emitió su Recomendación General Número 35 (en adelante RG35) en materia de violencia por razón de género contra la mujer, la cual actualiza la Número 19 (en adelante RG19) que data de 1992.

El Comité de la CEDAW es un órgano técnico integrado por 23 expertas electas por los Estados parte y, como el resto de los órganos creados por tratados,² juega un papel importantísimo en el sistema de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, toda vez que tiene a su cargo el impulso y monitoreo del cumplimiento de la Convención, a través –en primera instancia– del examen de los informes periódicos que cada Estado parte rinde sobre las acciones desarrolladas para hacer efectivas las disposiciones de la misma.

Además, el Comité puede recibir y examinar comunicaciones formuladas por personas –individual o colectivamente– cuando consideren que alguno de los Estados parte ha violentado alguno de los derechos consagrados en dicho tratado, lo que da inicio a un procedimiento no jurisdiccional de protección que puede derivar en la formulación de recomendaciones específicas para el Estado parte involucrado a fin de reparar el daño causado y prevenir la repetición de los hechos. Dicha competencia tiene que ser expresamente reconocida por los

* Investigadora del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.

¹ Adoptada en 1979 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, entró en vigor en septiembre de 1981.

² Actualmente existen nueve órganos creados por los tratados de derechos humanos en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas: Comité de Derechos Humanos (CCPR, por sus siglas en inglés); Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés); Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés); Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés); Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés); Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés); Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés), y Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés).

Estados parte, mediante la ratificación o adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención, adoptado en 1999 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.³

También puede emitir Recomendaciones Generales, a través de las cuales interpreta y desarrolla el contenido de las disposiciones convencionales, brindando orientación y recomendaciones a los Estados parte para que puedan cumplir adecuadamente sus obligaciones y se avance de esta manera en la consecución del fin y propósito del instrumento. Esta facultad característica de los órganos creados por los tratados se ha convertido en uno de los principales mecanismos a través de los cuales se ha avanzado en el establecimiento del contenido específico de los derechos humanos y en la determinación de las obligaciones estatales concretas que se derivan de ellos, lo que ha convertido a estos instrumentos en una herramienta de tremenda utilidad no solo para los Estados parte en los tratados sino también para todas las personas, instituciones públicas y organizaciones civiles interesadas en promover el conocimiento y exigir el cumplimiento de los derechos humanos.⁴

Es en este marco de actuación en el que se ubica la reciente emisión de la RG35 del Comité CEDAW, la cual retoma la definición de violencia contra las mujeres por razón de género que se incluyó en la RG19, a saber, “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”,⁵ la cual constituye una manifestación de la discriminación en contra de las mujeres tal como se define a ésta en el artículo 1 de la Convención y es, por lo tanto, una violación a sus derechos humanos.⁶

Las principales aportaciones de esta nueva RG son —a juicio de quien escribe— tres, en primer lugar, la aseveración de que la prohibición de la violencia de género en contra de las mujeres ha alcanzado ya el rango de norma consuetudinaria internacional; el esclarecimiento de las obligaciones estatales derivadas de la misma; y la formulación de una amplia relación de recomendaciones a fin de que los Estados puedan cumplir con aquéllas.

La prohibición de la violencia basada en el género contra las mujeres como norma consuetudinaria

Respecto a este primer punto, el Comité sostiene que la *opinio iuris* y la práctica subsecuente de los Estados durante los 25 años que siguieron a la adopción de la RG19 han dado a la prohibición de la violencia de género contra la mujer el carácter de norma consuetudinaria. Al respecto, conviene recordar que a dife-

³ México ratificó dicho Protocolo Facultativo en 2002.

⁴ Kerstin Mechlem, “Treaty Bodies and the Interpretation of Human Rights”, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. Nashville, vol. 42, núm. 3, mayo de 2009, p. 908.

⁵ Comité CEDAW, Recomendación General Número 19 “La violencia contra la mujer”, 1992, párr. 6, disponible en http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_S.pdf

⁶ Comité CEDAW, Recomendación General Número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General Número 19, 2017, párr. 1, disponible en <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRICAqhKb7yhsldCroIUTvL-RFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuaxmiWrx1jUjN2YPr87ua2okE3WtRLrbfzNSeawgN93ZXA RqomEiCHloBw6%2f4bwzco>

rencia del derecho de los tratados, el cual está ampliamente regulado en diversos tratados internacionales,⁷ el proceso de formación de la costumbre internacional no está claramente desarrollado en algún instrumento. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en considerar los dos elementos señalados en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como constitutivos de una norma consuetudinaria:⁸ a) la reiteración de una práctica por parte de los Estados, y b) la conciencia de que dicha práctica corresponde a derecho, es decir, es obligatoria.⁹

Como prueba de la práctica de los Estados y de la *opinio iuris* respecto a la prohibición de la violencia de género en contra de las mujeres, el Comité sistematiza de manera breve los siguientes desarrollos:

- Las acciones llevadas a cabo por los Estados parte en materia de armonización legislativa y de políticas públicas a fin de atender diversas manifestaciones de la violencia en razón de género en contra de las mujeres, en particular:¹⁰
 - El fortalecimiento de los marcos normativos para combatir todas las formas de violencia contra la mujer;
 - Mayor énfasis en las iniciativas para prevenir la violencia contra la mujer;
 - Aumento de la prestación de servicios de apoyo multisectoriales a fin de dar una atención integral a la problemática; y
 - Mejora en la generación de los datos y las pruebas sobre la violencia contra la mujer.
- La práctica de Estados que no son parte de la Convención (Estados Unidos de América, Palau, la República Islámica del Irán, Somalia, el Sudán y Tonga) en la adopción de legislación nacional en materia de violencia contra la mujer; en la formulación de invitaciones a la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias para que realice visitas *in situ*; en la aceptación de recomendaciones en la materia formuladas en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos; y en la aprobación de resoluciones en este órgano sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
- La adopción de documentos multilaterales de naturaleza diversa, declarativos y convencionales, tendentes a la eliminación de la violencia de género en contra de las mujeres: la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra

⁷ Por citar los principales instrumentos en la materia: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; la Convención de Viena sobre Sucesión de Estados en Materia de Tratados de 1978, y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986 (esta última aún no en vigor).

⁸ Véase Manuel Becerra Ramírez, "Notas sobre problemas teóricos de la costumbre internacional", en Manuel Becerra Ramírez *et al.*, coords., *Obra en homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes*. México, UNAM, 2008, t. II pp. 176-177, y Manuel Díez de Velasco, *Instituciones de derecho internacional público*. Madrid, Editorial Tecnos, 2009, pp. 136-139.

⁹ Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

[...]

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;

[...]

¹⁰ En este rubro el Comité retoma el informe del Secretario General sobre el examen y la evaluación de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, E/CN.6/2015/3, de diciembre de 2014, párrs. 120-139, disponible en <https://undocs.org/es/E/CN.6/2015/3>

la Mujer (1993); la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y sus exámenes quinquenales; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994); el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (2003); el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (2011); la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y contra las Niñas en la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (2013); la Estrategia árabe para combatir la violencia contra la mujer, 2011-2030; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), por citar algunos de los ejemplos más representativos.

- Asimismo, si bien no constituyen una práctica estatal, el Comité también echó mano de los pronunciamientos de otros órganos de tratados (por ejemplo, la Observación General Número 28 del Comité de Derechos Humanos sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres), de algunos procedimientos especiales (en particular del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica y del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), y de la jurisprudencia de tribunales internacionales, como elemento auxiliar para la determinación de que la prohibición de la violencia de género en contra de las mujeres es una norma internacional consuetudinaria. Mención específica le mereció al Comité la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *González y otras ("Campo Algodonero")* contra México (2009), en la que el Tribunal regional recordó que la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer reflejó "una preocupación uniforme en todo el hemisferio sobre la gravedad del problema de la violencia contra la mujer, su relación con la discriminación históricamente sufrida y la necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla".¹¹

En conjunto, los precedentes antes citados no solo constituyen una prueba de una práctica reiterada de los Estados, sino que demuestran también una conciencia compartida de que al actuar de tal manera se está dando cumplimiento a una obligación jurídica. Ahora bien, los efectos de esta conclusión no son menores, pues implican la constitución de una nueva norma de derecho internacional independiente e igualmente vinculante que la convencional a partir de la cual se originó,¹² con la gran diferencia de que la norma consuetudinaria podrá ser exigible a todos los Estados.¹³

¹¹ Corte IDH, *Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México*, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205, párr. 61, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

¹² Nos encontraríamos ante lo que Eduardo Jiménez de Aréchaga ha denominado "efecto constitutivo o generador", haciendo referencia a la formación de una costumbre a partir de la disposición de un tratado, como consecuencia de la práctica posterior de los Estados de conformidad con aquella, de manera constante y uniforme. Véase M. Diez de Velasco, *op. cit.*, *supra* nota 8, pp. 143-147.

¹³ Este supuesto se encuentra previsto en el artículo 38 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: "Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias para terceros Estados en virtud de una costumbre internacional. Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 [relativos a la generación de derechos y obligaciones para terceros Estados] no impedirá que una norma enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como norma consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal".

De igual manera, al no estar sujeta la norma consuetudinaria a las reglas del derecho de los tratados relativas a la formulación de reservas y denuncia, aquélla sería exigible incluso para los Estados parte que hubieran formulado una reserva a la Convención o que eventualmente llegaran a denunciarla.¹⁴

Finalmente, es importante considerar que el pronunciamiento del Comité CEDAW respecto al carácter consuetudinario de la prohibición de la violencia de género en contra de las mujeres, no implica una determinación jurídicamente vinculante de que esto sea así, no obstante, es de esperar que la práctica subsecuente y concurrente de los Estados respecto a esta aseveración termine por consolidar el consenso internacional respecto a la existencia de la nueva norma consuetudinaria.

Las obligaciones derivadas de la prohibición de la violencia de género en contra de las mujeres

Ahora bien, el desarrollo normativo que se expone en la RG35 está lejos aún de significar la eliminación de la violencia basada en el género en contra de las mujeres, y así lo reconoce el propio Comité al señalar que ésta “sigue siendo generalizada en todos los países, con un alto grado de impunidad. Se manifiesta en una serie de formas múltiples, interrelacionadas y recurrentes, en diversos ámbitos, del privado al público, incluidos entornos tecnológicos, y trasciende las fronteras nacionales en el mundo globalizado contemporáneo”.¹⁵

En concreto, el Comité apunta que en muchos Estados la legislación para enfrentar la violencia de género contra las mujeres no existe, es insuficiente o simplemente no se aplica de manera adecuada,¹⁶ lo que implica un incumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres a la no discriminación y a la igualdad, *de iure* y *de facto*, contenidas en el artículo 2 de la Convención, como ya lo había apuntado en su Recomendación General Número 28.¹⁷

El caso mexicano no puede ser más ilustrativo de esta paradoja, pues pese a que desde 2007 se emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se estableció un Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres, el cual consiste en la implementación de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida¹⁸ en un territorio determinado (res-

¹⁴ M. Diez de Velasco, *op. cit.*, *supra* nota 8, pp. 144-145.

¹⁵ Comité CEDAW, *op. cit.*, *supra* nota 6, párr. 6.

¹⁶ *Ibidem*, párr. 7.

¹⁷ Comité CEDAW, Recomendación General Número 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 2010, párr. 10, disponible en <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/63/PDF/G1047263.pdf?OpenElement>

¹⁸ La citada Ley General define, en su artículo 21, a la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

pecto al cual se emite la alerta), éstos no han probado ser eficaces en la prevención y combate de este fenómeno.¹⁹

De 2015 a julio de 2017, se han emitido alertas por violencia de género en contra de mujeres en 90 municipios de 12 entidades federativas, así como medidas especiales para otros 21 municipios, y existen siete solicitudes de alerta pendientes de resolución, relativas a igual número de entidades federativas.²⁰ Baste señalar que la primera alerta por violencia de género contra las mujeres se emitió (cinco años después de la formulación de la solicitud) respecto a 11 municipios del Estado de México en julio de 2015,²¹ y que pese a que la misma ha permanecido vigente por más de dos años, esta entidad federativa continua encabezando la estadística de homicidios en contra de mujeres con el 15.28 % de los casos.²²

Al respecto, el Comité clarifica que la obligación de los Estados de tomar las medidas necesarias para eliminar la violencia de género contra las mujeres es una obligación de carácter inmediato, y que las demoras en su consecución no son justificables bajo ningún supuesto económico, cultural o religioso.²³ Con base en esta interpretación, la declaración formulada por el Estado mexicano al firmar la Convención en 1980, según la cual sus disposiciones serían aplicadas de conformidad con la legislación nacional y la disponibilidad de recursos, aunque no constituyó una reserva en sentido formal, habría quedado completamente desfasada.

Asimismo, como ya se había planteado en la RG19, el Comité explica que los Estados parte pueden incurrir en responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones convencionales como consecuencia de los actos y omisiones de sus agentes, pero también de actores privados.

Respecto a la responsabilidad por actos u omisiones de agentes estatales, el Comité precisa que:²⁴

- Incluye las acciones u omisiones de servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
- Que además de garantizar que las leyes, políticas y programas de gobierno no discriminen a las mujeres, los Estados parte deben contar con legislación específica y servicios jurídicos, efectivos y accesibles, para afrontar todas las formas de violencia de género contra las mujeres cometidas por sus agentes, tanto al interior de su territorio como extraterritorialmente.
- Que los Estados deben prevenir tales actos, así como investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, además de reparar adecuadamente a las víctimas, teniendo

¹⁹ Al respecto, véase el *Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres*, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en octubre de 2017, el cual está disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-AVGM.pdf>

²⁰ Instituto Nacional de las Mujeres, "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres", información actualizada al 21 de julio de 2017, disponible en <https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739>

²¹ *Ibidem*.

²² Instituto Nacional de Geografía y Estadística, "Mortalidad. Defunciones por homicidios", datos preliminares correspondientes a enero-diciembre de 2016, disponible en http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=

²³ Comité CEDAW, *op. cit.*, *supra* nota 6, párr. 21.

²⁴ *Ibidem*, párrs. 22-23.

en cuenta las las múltiples e interrelacionadas formas de discriminación que puede sufrir una mujer, toda vez que dichas circunstancias provocan que la violencia de género afecte de manera diferenciada a las mujeres.²⁵

En materia de responsabilidad por los actos u omisiones de agentes no estatales, el Comité distingue dos supuestos:

- a. Aquéllos que son atribuibles al Estado por tratarse de actos u omisiones realizadas por actores no estatales facultados para ejercer alguna función pública, por ejemplo la prestación de algún servicio público, o bien por haberse realizado siguiendo instrucciones o bajo el control de agentes estatales, tanto al interior del territorio nacional como en el extranjero.²⁶
- b. Aquéllos que no son directamente atribuibles al Estado pero respecto a los cuales éste incumple su obligación de actuar diligentemente para prevenir, investigar, enjuiciar castigar y reparar los actos u omisiones de agentes no estatales que constituyen violencia de género en contra de las mujeres, tanto dentro de su territorio como al exterior.²⁷

Las recomendaciones

Finalmente, el Comité formula una serie de recomendaciones en materia de prevención, investigación, enjuiciamiento, castigo y reparación de la violencia de género en contra de las mujeres, respecto a las cuales conviene destacar las siguientes a partir del contexto mexicano, toda vez que si bien se han tipificado las distintas formas de violencia de género contra las mujeres, es innegable que sigue habiendo un largo camino por recorrer a fin de garantizar la protección de las víctimas y su acceso a la justicia y la reparación efectiva.

Contrariamente, en materia de prevención poco se ha avanzado en revertir las causas de fondo de la violencia de género contra las mujeres en México, particularmente las actitudes y prácticas patriarcales y los estereotipos de género, la desigualdad de las mujeres al interior de las familias y las circunstancias que limitan la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos. Por lo tanto, resultan de gran pertinencia las recomendaciones del Comité tendentes a:

- Incorporar contenidos en materia de igualdad de género en los programas educativos de todos los niveles de enseñanza, tanto en el sector público como en el privado.
- Así como la generación de programas de sensibilización y concienciación que promuevan el rechazo de la violencia de género contra las mujeres; la difusión de información sobre los recursos e instancias ante las cuales se pueden denunciar estos actos; el combate a la estigmatización de las víctimas. Dichos programas deben estar dirigidos a la sociedad en general, hombres y mujeres,

²⁵ *Ibidem*, párr. 12.

²⁶ *Ibidem*, párr. 24 inciso a).

²⁷ *Ibidem*, párr. 24 inciso b).

pero también a las y los educadores y a todos los servidores públicos involucrados en la atención de estos actos de violencia.

- Medidas encaminadas a garantizar que el espacio público sea seguro y accesible para mujeres y niñas.
- Tomar acciones para fomentar que los medios de comunicación eviten la reproducción de estereotipos de género, así como para que realicen una cobertura adecuada de los casos de violencia de género en contra de las mujeres.
- Implementar la capacitación obligatoria, periódica y efectiva del personal del poder judicial, abogados y abogadas, legisladores, así como agentes encargados de hacer cumplir la ley, incluido personal de salud, en materia de prevención y eliminación de la violencia de género en contra de las mujeres.
- Fomentar la implementación en el sector privado, principalmente el empresarial, de acciones encaminadas a erradicar la violencia de género en contra de las mujeres.

Asimismo, deben mantenerse en constante evaluación todas las medidas destinadas a garantizar la protección de las mujeres denunciantes y testigos de violencia de género antes, durante y después de los procesos judiciales; el acceso efectivo de las víctimas a las instituciones de administración de justicia; la reparación integral y oportuna del daño para las mismas; el registro de información sobre los avances en el combate a la violencia de género contra las mujeres, siempre con la participación activa de las mujeres, de la academia y de organizaciones civiles especializadas en la materia.

Comentarios finales

Toda vez que la violencia de género contra las mujeres sigue siendo un fenómeno presente en todas las sociedades del mundo, si bien con manifestaciones e intensidades diversas, la emisión de la RG35 por parte del Comité CEDAW no solo ha resultado pertinente, sino que era necesaria. Abona no solo en la condena de este tipo de actos postulando que su prohibición es ya una norma consuetudinaria internacional, sino que brinda elementos para exigir a las autoridades nacionales que redoblen sus esfuerzos para erradicarlos, fortaleciendo así el trabajo de las personas, instancias públicas y organizaciones civiles que a nivel nacional están comprometidas con ese objetivo.

El listado de recomendaciones contenidas en este instrumento, brevemente comentadas en este trabajo, constituyen un estándar mínimo conforme al cual se puede verificar si los Estados parte están realizando las acciones necesarias para cumplir el propósito de la Convención y, en su caso, evidenciar y señalar los pendientes o las deficiencias. Por lo tanto, se trata de un instrumento que debe ser estudiado, debatido y –sobre todo– utilizado para incidir en la formulación y evaluación de las políticas públicas, pero, sobre todo, para alcanzar las transformaciones sociales necesarias para que las mujeres puedan efectivamente gozar de una vida libre de violencia.

Recepción: 4 de octubre de 2017

Aprobación: 23 de octubre de 2017